

FAUNA Y TERRENOS EN PELIGRO

Inma Bermejo

Las actuaciones recogidas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 son a la vez una solución y un problema en la lucha contra el cambio climático. El plan contempla un despliegue masivo y poco planificado de energías renovables que choca frontalmente con la conservación de la biodiversidad.

El número de expertos que denuncian sus deficiencias se multiplica por momentos. Entre ellos, la Alianza Energía y Territorio (Aliente) denuncia el desarrollo «sobredimensionado» de las instalaciones renovables en ausencia de políticas efectivas de ahorro. A finales de 2020, 23 científicos españoles expertos en conservación de aves y murciélagos alertaron a través de una carta publicada en revista 'Science' de los daños irreversibles que puede ocasionar esta expansión acelerada y desordenada. Y la Plataforma Ciudadana para una Transición Ecológica Justa denuncia que el texto no garantiza una transición democrática «para el conjunto de la sociedad, el territorio y la biodiversidad».

Más de lo necesario

La principal evidencia del problema es la cantidad. El Gobierno español prevé alcanzar en 2030 89GW de potencia procedente de instalaciones eólicas y solares fotovoltaicas. Actualmente, ya hay 36GW de renovables, por lo que solo sería necesario desplegar 53GW más, tal y como reclama Aliente. No obstante, ya existen permisos de acceso a la red para proyectos que representan 121GW, lo que supone duplicar las cifras previstas en el PNIEC.

«Ese sobredimensionamiento no es para luchar contra el cambio climático. No es para producir nuestra energía. En el fondo, lo que se ha decidido es que seamos el granero energético de Europa», advierte Luis Bolonio, portavoz e impulsor de Aliente. Gran parte de la inversión en estos proyectos será de origen público procedente de los Fondos de Recuperación europeos, un dinero que irá a parar a grandes multinacionales y a fondos de inversión. Por otro lado, «a través de las subastas de renovables que saca el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), se garantiza a estas empresas un

precio mínimo por la energía», explica Bolonio. Es un negocio redondo, aunque no para la biodiversidad.

El despliegue viene acompañado de daños severos en la fauna y la flora. «A nivel biológico, España es la última reserva de aves esteparias como la avutarda y el sisón», advierte Eduardo de Miguel, CEO de la Fundación Global Nature. Los parques eólicos se ubican habitualmente en «áreas montañosas de elevado valor paisajístico y son causa directa de la mortalidad de miles de aves y quirópteros», advierte Aliente. Para aves planeadoras como el buitre leonado, «se estima que la mortalidad anual en parques eólicos españoles puede acercarse al millar de ejemplares», subraya Juan Manuel Pérez-García, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, firmante de la carta publicada en 'Science'. Carlos Ibáñez, de la EBD/CSIC, completa estas escalofriantes cifras destacando que

el número de murciélagos muertos en estas instalaciones «afecta a un mínimo de 200.000 individuos».

Alterar el mundo rural

Las parques de renovables requieren «amplias extensiones de áreas de cultivo, pastizales y estepas naturales de gran importancia a nivel productivo y ecológico», añaden en este sentido desde Aliente. Las megacentrales conllevan la industrialización del mundo rural provocando que las comunidades campesinas y los territorios periféricos se lleven la

peor parte, denuncia la Plataforma Ciudadana para una Transición Ecológica Justa. «Están pagando a los agricultores un alquiler de 1.500 o 1.700 euros por hectárea y año de arrendamiento en Castilla-La Mancha. Un agricultor que tenga apenas 10 hectáreas y al que le prometan 10 años por adelantado se embolsa de golpe 150.000 euros», explica Eduardo de Miguel. Esto está incentivando el abandono y el despoblamiento rural, además de estar acabando con el turismo de esas zonas, una de las grandes fuentes de ingresos de España.

LA BIODIVERSIDAD, ¿EL DAÑO COLATERAL DE LAS RENOVABLES?

El despliegue previsto por el Gobierno es masivo y poco planificado, según varios expertos, quienes advierten que si sigue adelante habrá daños irreversibles. La clave no está en sustituir todas las fuentes de energía fósiles por renovables, sino en aumentar la eficiencia energética y reducir el consumo

El Miteco ha hecho un mapa de exclusión donde no deberían ir estos parques de renovables y el Estudio Ambiental Estratégico del PNIEC recomienda ubicar las nuevas instalaciones preferentemente fuera de espacios protegidos, así como de los espacios de la Red Natura 2000. Pero esto no es realmente obligatorio.

Al margen de la ley

Buena parte de las especies que están sufriendo los efectos de este crecimiento sin control se encuentran fuera de estas áreas, «por lo que no existen herramientas legales que permitan blindarlas ante el avance de macroproyectos energéticos», comenta David Serrano, investigador de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC), en la carta ya nombrada. «Ya se ha demostrado científicamente que la Red Natura 2000 no es suficiente para conservar la biodiversidad porque está mal diseñada y los planes de gestión son reducidos», puntualiza Luis Bolonio. La evaluación de impacto ambiental también es deficiente. Muchos proyectos salen adelante y luego se demuestra que son muy dañinos ya que «no es un proceso independiente. Es el propio promotor el que elabora los estudios preoperacionales», denuncia el portavoz de Aliente.

En busca del autoconsumo

La promoción ilimitada de renovables debe sustituirse por una mejora de la eficiencia energética y por un plan orientado a la reducción de las necesidades de consumo. El paquete de Energía Limpia (también conocido como paquete de invierno) está compuesto por una serie de directivas europeas de obligado cumplimiento que marcan cómo se debe hacer la transición energética. «Lo que dice Europa es que antes de plantearse ninguna planta de generación, se debe evaluar la capacidad de ahorro y de eficiencia energética», explica Bolonio. «En cualquier caso, esa generación de energía debe basarse en el autoconsumo, dando poder a la ciudadanía», añade. Esto bajaría el precio de la luz y fomentaría la eficiencia, evitando producir y perder mucha energía, como ocurre con el sistema actual.

La necesidad más inmediata es llevar a cabo un proceso de implantación «más planificado y racional», que evite ubicar estas instalaciones en áreas «de alta biodiversidad y realizar paradas de turbinas cuando se detecten altas mortalidades», concluyen los firmantes de la carta publicada en 'Science'.

